

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Archivos Judiciales Militares, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

I

Dicho esto, la norma sometida a informe tiene por objeto la regulación de los archivos judiciales, estableciendo el régimen de conservación y custodia de los documentos judiciales militares, así como el acceso a los mismos. A tal efecto, se establece un sistema de archivos formado, conforme al artículo 6, por los archivos judiciales militares de gestión, existentes en todos los órganos de la jurisdicción militar, y los archivos judiciales militares territoriales y central, integrados respectivamente en los Tribunales Militares Territoriales y en el Tribunal Militar Central.

El sistema regulado por el Proyecto prevé igualmente la transferencia de los documentos judiciales militares desde los archivos militares de gestión a los territoriales o al central en los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 7, así como el régimen de valoración y procedimientos de transferencia posteriores desde dichos archivos, previo análisis por parte de las Comisiones Calificadoras, Territoriales y Central, a las que se refiere el artículo 16.

De este modo, se establece para el ámbito de la jurisdicción militar un sistema de archivo y documentación similar al previsto para los restantes órganos jurisdiccionales por el Real decreto 937/2003, de 18 de julio, cuyas disposiciones son en gran medida reproducidas por el Proyecto sometido a informe, tanto en lo referido a la estructura de los archivos judiciales como en lo que afecta al régimen de conservación, acceso y expurgo de la documentación judicial.

El citado Real decreto 937/2003 fue sometido en fase de Proyecto a informe de esta Agencia Española de Protección de Datos, emitiéndose por la misma informe de fecha 30 de mayo de 2003, copia del cual se adjunta al presente informe sin perjuicio de la expresa referencia que en él se hará a

algunas de las cuestiones que allí fueron analizadas, cuyas conclusiones, con carácter general deberían ser igualmente tomadas en consideración en el Proyecto ahora analizado.

II

En particular, como se ha indicado, el sistema se estructura en torno a la existencia en cada órgano judicial de los archivos judiciales militares de gestión, siendo los datos transmitidos desde dichos ficheros, una vez transcurridos cinco años desde la incoación del procedimiento, cuando no estuvieran pendientes de actuación procesal alguna o un año desde su completa conclusión, incluyendo la ejecución de la misma, a los ficheros Territoriales o Central.

Este modelo coincide con el establecido en el Real decreto 937/2003, que establece en su artículo 5 un procedimiento similar de comunicación entre los distintos archivos judiciales. Por ello, debe traerse a colación lo indicado en el apartado V del informe elaborado en aquel momento por esta Agencia, en que se indicaba lo siguiente:

“Otra cuestión a resolver, atendido el texto de la norma sometida a informe es la de la naturaleza de las transmisiones de la documentación judicial que se producirán una vez cumplidos los plazos de conservación de la misma en el Archivo Judicial de Gestión. De este modo, cumplidos los plazos de cinco años desde la incoación de los asuntos que no estén pendientes de actuación procesal alguna o un año desde la firmeza de la sentencia que en su caso hubiera recaído, la documentación relacionada con los correspondientes procedimientos deberá ser remitida a los Archivos Judiciales Territoriales o al Archivo Judicial Central.

Siguiendo una coherencia con la argumentación anteriormente señalada, que parte de considerar como responsable de cada uno de los Archivos Judiciales de Gestión al propio Órgano Jurisdiccional ante el que se tramite el correspondiente procedimiento, cabría considerar que los Órganos responsables de la custodia de los Archivos Territoriales y Central tendrían frente a aquél la consideración de encargado del tratamiento, definido por el artículo 3 g) de la Ley Orgánica 15/1999 como “La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”.

En efecto, la función de los citados archivos sería la de proceder a la custodia de la documentación judicial por cuenta del Órgano Jurisdiccional ante el cual se generó. Abona esta tesis el hecho de que el artículo 12.1 del Proyecto recuerda que “la documentación judicial conservada en los Archivos Judiciales Territoriales y en el Central estará en todo momento a disposición del órgano judicial al que pertenezca”,



previando además el artículo 12.3 la posibilidad de revisión “por el Juez o Presidente del Órgano al que corresponda la documentación” de la denegación de acceso que efectuase el Secretario encargado del Archivo Territorial o del Central correspondiente.

Sentada así la consideración del Archivo Territorial o Central como encargados del tratamiento, cuya función será la de almacenamiento de los expedientes judiciales que por sus circunstancias no deban permanecer en la Sede del Órgano jurisdiccional donde se crearon, será preciso que la norma sometida a informe establezca al menos mínimamente los requisitos establecidos por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, que han de regir el vínculo jurídico entre el responsable y el encargado del tratamiento.

A tal efecto, si bien no será precisa la existencia de contrato escrito entre ambos, dado que la relación operará directamente de lo establecido en el propio Real Decreto, sí será necesario añadir un nuevo apartado que incluya esos requisitos mínimos exigidos por el artículo 12.

Por este motivo, se propone la adición de un nuevo apartado 4 al artículo 13 del Proyecto, con el siguiente tenor:

***“4.- Quienes en virtud de lo establecido en el presente Real Decreto tengan atribuida la ordenación, custodia y conservación de los Archivos Judiciales Administrativos y Central tratarán la información contenida en la documentación judicial remitida a dichos archivos exclusivamente con la finalidad de almacenamiento de la documentación judicial y el cumplimiento de lo establecido en las Leyes, sin destinar los datos a ninguna otra finalidad distinta. Los datos únicamente podrán ser transmitidos, en su caso, a las Juntas de Expurgo en los supuestos y mediante el procedimiento establecido en el artículo 15 o a quienes tuvieran derecho a acceder a los mismos de conformidad con lo establecido en el artículo 235 de la Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el apartado 3 del artículo 12 del presente Real decreto.*”**

***En lo demás, la relación entre los Órganos a los que corresponda la llevanza de los Archivos Judiciales de Gestión y los Archivos Judiciales Territoriales y Central se regirá por lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, si bien no será necesaria la existencia de contrato escrito”.*”**

Pues bien, teniendo en cuenta lo que entonces se propuso, cabrá considerar que la función de los archivos territoriales y central será igualmente en este caso la de un encargado del tratamiento que actuará por cuenta del responsable del fichero de gestión.

El Real Decreto 937/2003 incorporó exclusivamente el primer párrafo del texto propuesto en su día por esta Agencia, que igualmente se contiene en el artículo 15.4 del Proyecto sometido a informe. Sin embargo, a fin de garantizar la seguridad jurídica en la determinación de la posición jurídica de cada órgano responsable del correspondiente archivo en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 y de establecer mecanismos que eviten el necesario cumplimiento de los requisitos formales previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica, se considera necesario que el Proyecto incorpore igualmente la segunda de las previsiones que contenía la propuesta emitida en su día por esta Agencia, por lo que sería necesario añadir un párrafo segundo al artículo 15.4 del Proyecto, en que se indicase que:

“En lo demás, la relación entre los Órganos a los que corresponda la llevanza de los Archivos Judiciales de Gestión y los Archivos Judiciales Territoriales y Central en lo que se refiere al tratamiento de datos de carácter personal se regirá por lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, si bien no será necesaria la existencia de contrato escrito.”

III

Por otra parte, el artículo 9 del Proyecto, bajo la rúbrica “acceso a la documentación del Archivo Judicial Militar de Gestión”, establece un régimen de acceso a los documentos del archivo, tanto por quienes fueron parte en el proceso como por otros terceros que acrediten un interés legítimo, en los términos prevenidos por el artículo 235 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del poder judicial.

Respecto de los primeros, el interesado únicamente verá limitado su derecho de acceso “en los supuestos previstos en la legislación vigente”.

Este precepto debe ponerse en conexión con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en particular, con el artículo 30.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, según el cual “podrá también denegarse el acceso en los supuestos en que así lo prevea una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa o cuando éstas impidan al responsable del tratamiento revelar a los afectados el tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso”.

Tomando esta previsión en cuenta, sería deseable que la redacción del artículo 9.3 del Proyecto se ajustase a la misma, reemplazando el término “legislación vigente” por **“en los supuestos en que así lo prevea una Ley”**.

En cuanto al acceso a los documentos por terceros interesados que no hubieran sido parte en el proceso, el artículo 9.4 limita el mismo a los

supuestos habilitados por el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, en cuanto que exige el consentimiento del interesado o la concurrencia de uno de los casos previstos en el artículo 11.2 de la misma, siendo tal previsión plenamente congruente con las normas de protección de datos de carácter personal.

Por su parte, el apartado 5 de este precepto establece un procedimiento de revisión de la denegación del acceso solicitado, referido tanto a los supuestos de ejercicio del derecho de acceso por el interesado como a los que en la práctica implican la cesión de datos del expediente a terceros, sujetos al régimen del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999.

Sin perjuicio de la utilidad práctica del uso de esta vía de recurso en el caso de denegación del ejercicio del derecho de acceso, debería tenerse en cuenta que el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “el interesado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos o, en su caso, del Organismo competente de cada Comunidad Autónoma, que deberá asegurarse de la procedencia o improcedencia de la denegación”.

Por este motivo, sería necesario completar el precepto al que ahora se está haciendo referencia, añadiendo un párrafo segundo al artículo 9.5 en que se indique que **“Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”**.

Esta misma regla debería ser tenida en cuenta en el régimen establecido en el artículo 14.4 del Proyecto para los Archivos Judiciales Militares Territorial y Central.

Por último, y sin perjuicio de contenerse una previsión semejante en relación con la devolución o acceso a los documentos aportados a los que se refiere el artículo 17, sería conveniente que el propio artículo 9 del Proyecto incorporase una previsión que aclarase las limitaciones al acceso a los datos de terceros derivados de la aplicación de la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico.

Por ello, se propone la inclusión en el artículo 9 de un apartado, similar al establecido en el artículo 7.3 del Real decreto 937/2003 y en el artículo 17.5 del Proyecto sometido a informe, en que se indique que **“En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57.1.c) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, los documentos que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte, si su**

fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años a partir de la fecha de los documentos”.

IV

El Capítulo III establece una serie de previsiones referidas a la conservación y posterior destino de los documentos incluidos en los archivos territoriales y central, regulando el artículo 16 un proceso de valoración, que corresponderá a las Comisiones Calificadoras de Archivos Judiciales Militares territoriales y central, que evaluarán los documentos, decidiendo acerca de su devolución a los interesados en el proceso y remitiendo posteriormente las propuestas correspondientes de eliminación o transferencia de los documentos al Archivo Histórico Militar.

En relación con la actuación de las citadas comisiones debería tenerse en cuenta lo que ya indicó esta Agencia en relación con las Juntas de Espurgo al elaborar su informe al entonces Proyecto de Real decreto 937/2003, en el sentido de que las mismas actuaban por cuenta del órgano responsable del archivo de gestión, y que su actuación debería quedar sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y, en particular, a su artículo 12, para lo que sería conveniente incorporar un apartado 3 al artículo 16 del Proyecto en que se indicase que **“Las Comisiones Calificadoras tratarán la información contenida en la documentación judicial remitida a las mismas exclusivamente con las finalidades a las que se refiere el apartado anterior y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”**.

También en relación con las previsiones de este Capítulo, el artículo 17 regula el régimen de recuperación o consulta de los documentos, estableciendo en cuanto a ésta última, la posibilidad de los terceros que acrediten un interés legítimo de obtener certificación o testimonio de los mencionados documentos.

A nuestro juicio sería preciso que las limitaciones al acceso a los documentos, y en consecuencia a la obtención de los testimonios o certificaciones de los mismos únicamente fuera posibles con el alcance y extensión a los que se refiere el propio Proyecto en su artículo 9; es decir, cuando se encontrasen amparadas por el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999.

El Proyecto, ciertamente, contiene una previsión específica en relación con el acceso a los datos en los términos previstos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, respecto de la que ya se ha propuesto su incorporación al artículo 9 del Proyecto. No obstante, sería preciso que el artículo 17 recordase que el acceso a la información únicamente será posible en caso de que concurran los requisitos a los que se refiere el artículo 9.4 del Proyecto.



Por ello, **se propone que en el artículo 17 se señale que el acceso a los documentos por quienes no hubieran sido parte en el proceso y la consecuente obtención del testimonio o certificación a los que se refieren el artículo 17.3 sólo será posible en los supuestos previstos en el artículo 9.4 del propio Reglamento.**

V

En lo demás se considera que el Proyecto ha incorporado las aclaraciones que fueron apuntadas en su día por parte de esta Agencia al analizar el entonces Proyecto de Real Decreto 937/2003, por lo que se considera que el Proyecto resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.